

**Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

**Comité de Derechos Humanos**

**135 Período de sesiones**

**Informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de la República Oriental del Uruguay**

[30 de mayo de 2022]

ÍNDICE

[I.- Prólogo 2](#_Toc104560498)

[II.- Lista de cuestiones relativa al sexto informe periódico del Uruguay 2](#_Toc104560499)

[A. Información general sobre la situación de los derechos humanos a nivel nacional, incluyendo nuevas medidas y desarrollos relacionados con la implementación del Pacto 2](#_Toc104560500)

[Respuesta al Párrafo 1 de la Lista de Cuestiones. - 3](#_Toc104560501)

[Mecanismo Nacional de Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones 3](#_Toc104560502)

[Avances en el Marco Jurídico e Institucional 3](#_Toc104560503)

[B. Información específica sobre la implementación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluyendo en relación a las recomendaciones anteriores del Comité 3](#_Toc104560504)

[Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (arts. 1,2 y 4) 3](#_Toc104560505)

[Respuesta al Párrafo 3 de la Lista de Cuestiones. - 3](#_Toc104560506)

[Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 4](#_Toc104560507)

[Respuesta al Párrafo 4 de la Lista de Cuestiones. - 4](#_Toc104560508)

[No discriminación y derechos de las minorías (arts. 2, 3, 16, 25, 26 y 27) 8](#_Toc104560509)

[Respuesta al Párrafo 5 de la Lista de Cuestiones. - 8](#_Toc104560510)

[Respuesta al Párrafo 6 de la Lista de Cuestiones. 9](#_Toc104560511)

[Orientación sexual e identidad de género (arts. 6, 7, 17 y 26) 10](#_Toc104560512)

[Respuesta al Párrafo 7 de la Lista de Cuestiones. 10](#_Toc104560513)

[Igualdad entre el hombre y la mujer (arts. 2, 3, 25 y 26) 11](#_Toc104560514)

[Respuesta al Párrafo 8 de la Lista de Cuestiones. - 11](#_Toc104560515)

[Violencia contra la mujer (arts. 3, 6, 7, 14, 17 y 26) 12](#_Toc104560516)

[Respuesta al Párrafo 9 de la Lista de Cuestiones. - 12](#_Toc104560517)

[Derecho a la vida, prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 3, 7, 9, 10, 14 y 17) 13](#_Toc104560518)

[Respuesta al Párrafo 11 de la Lista de Cuestiones. - 13](#_Toc104560519)

[Respuesta al Párrafo 12 de la Lista de Cuestiones. 13](#_Toc104560520)

[Eliminación de la trata de personas y de la esclavitud y la servidumbre (arts. 7, 8, 14 y 24) 16](#_Toc104560521)

[Respuesta al Párrafo 13 de la Lista de Cuestiones. 16](#_Toc104560522)

[Personas privadas de libertad y condiciones de detención (arts. 2, 6, 7, 9, 10 y 14) 17](#_Toc104560523)

[Respuesta al Párrafo 14 y 15 de la Lista de Cuestiones. - 17](#_Toc104560524)

[Lucha contra la impunidad y medidas de reparación en relación con las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura (arts. 2, 6, 7, 9 y 14) 18](#_Toc104560525)

[Respuesta al Párrafo 17 de la Lista de Cuestiones. - 18](#_Toc104560526)

[Migrantes, refugiados, apátridas y solicitantes de asilo (arts. 2, 3, 14, 16 y 23 a 26). 19](#_Toc104560527)

[Respuesta al Párrafo 18 de la Lista de Cuestiones. - 19](#_Toc104560528)

[Libertad de expresión, asociación y violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas (arts. 7, 19, 21 y 22) 20](#_Toc104560529)

[Respuesta al Párrafo 20 de la Lista de Cuestiones. - 20](#_Toc104560530)

[Respuesta al Párrafo 21 de la Lista de Cuestiones. - 21](#_Toc104560531)

[Personas con discapacidad 21](#_Toc104560532)

[Respuesta al Párrafo 26 de la Lista de Cuestiones. - 21](#_Toc104560533)

#

# I.- Prólogo

1. La Institución Nacional de Derechos y Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (INDDHH) presenta este informe para el 135° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, ocasión en que examinará el Sexto Informe Periódico de Uruguay, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección efectiva de los Derechos Civiles y Políticos.

2. Este informe responde algunas de las solicitudes de la Lista de cuestiones previas a la presentación del sexto informe periódico de Uruguay (CCPR/C/URY/5).

3. La INDDHH expresa su satisfacción por los avances logrados en varios aspectos que, si bien no se mencionan en el presente informe, constan en el del Estado uruguayo.

4. La INDDHH es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo y tiene por cometido la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el Derecho Internacional. Su creación fue fruto de un largo proceso en el que participaron muchas personas, organizaciones sociales, la comunidad internacional y se caracterizó por un amplio consenso político.

5. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) funciona en la órbita de la INDDHH conforme a lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) y la ley 18.446, de creación de la INDDHH.

6. Este es el segundo informe[[1]](#footnote-1) que la INDDHH presenta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incluyendo aquella información recabada o elaborada por la misma que refiera a la Lista de Cuestiones relativas al sexto informe periódico del Uruguay aprobada por el Comité en su 122º periodo de sesiones.

# II.- Lista de cuestiones relativa al sexto informe periódico del Uruguay

## A. Información general sobre la situación de los derechos humanos a nivel nacional, incluyendo nuevas medidas y desarrollos relacionados con la implementación del Pacto

### Respuesta al Párrafo 1 de la Lista de Cuestiones. -

### Mecanismo Nacional de Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones

7. La INDDHH valora la existencia de la Red Interinstitucional para la elaboración de informes y seguimiento de la implementación de recomendaciones y observaciones en materia de Derechos Humanos creada por Decreto 358/2016 de noviembre de 2016, como espacio de trabajo de articulación interinstitucional que agiliza la metodología necesaria para el reporte que el país debe realizar ante la comunidad internacional y efectiviza la implementación a nivel nacional.

 8. La consolidación de la Red y la implementación del SIMORE[[2]](#footnote-2) establecieron las bases para conformar el Mecanismo Nacional de Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones. La INDDHH oficia de observadora permanente en el mismo participando en todas sus instancias. Valora así que su funcionamiento se haya mantenido en estos años pese a las dificultades originadas por la pandemia y la declaración de la emergencia sanitaria.

9. Este Mecanismo ha demostrado su utilidad como instrumento de dialogo y consulta formal entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), organismos estatales y sociedad civil organizada. Se destaca que a partir del Decreto 89/2018, el MRREE, por sí mismo o a solicitud de las mesas interinstitucionales, asume el compromiso de convocar públicamente a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas propios de los informes a ser presentados a los órganos de tratados y al Examen Periódico Universal, en forma previa a su envío, auspiciando de esta forma un espacio de diálogo.

### Avances en el Marco Jurídico e Institucional

10. La INDDHH posee un Observatorio Legislativo mediante el cual monitorea los avances en el marco normativo e institucional en materia de derechos humanos.

11. En el período bajo revisión, la INDDHH destaca la aprobación de 35 leyes que se mencionan en el Anexo 1, en temáticas referidas a derechos humanos. Sobre varias de ellas se realizaron informes especiales.

## B. Información específica sobre la implementación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluyendo en relación a las recomendaciones anteriores del Comité

### Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (arts. 1,2 y 4)

### Respuesta al Párrafo 3 de la Lista de Cuestiones. -

12. Las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por el Estado uruguayo se aplican directamente en su ordenamiento jurídico, en virtud de lo dispuesto por los artículos 72 y 332 de la Constitución Nacional.

13. Desde la última ocasión en que el Estado uruguayo presentó su informe al Comité de Derechos Humanos, el país ratificó por Ley los siguientes tratados internacionales:

* Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 19.430 del 8/9/2016).
* Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (Ley 19.517 de 21/7/2017).
* Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (Ley 19.584 de 28/12/ 2017).
* Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) (Ley 19.773 de 17/07/2019).

14. Cabe destacar, en materia de institucionalidad de derechos humanos, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito de Presidencia de la República como órgano rector del enfoque de derechos humanos del Poder Ejecutivo, teniendo como cometido promover la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, cumpliendo las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación y la existencia también bajo la órbita de Presidencia de la República la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Esta Secretaría brinda a la INDDHH el soporte administrativo, gestión de contratos, solicitud de compra de materiales para el cometido de búsqueda de detenidos desaparecidos, asignado por la Ley 19.822 de 25/9/2019.

15. Por Ley 19.550 del 25/10/2017 se creó una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad que conoce exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período definido en la Ley 18.596, de 18 de setiembre de 2009, que estén en trámite o que se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional.

16.- Cabe recordar finalmente, que no se han tomado ningún tipo de medidas relativas a estados de emergencia en el período comprendido entre la última revisión del Comité y este Informe.

### Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)

### Respuesta al Párrafo 4 de la Lista de Cuestiones. -

17. La INDDHH es una institución relativamente nueva dentro del sistema de garantías de los derechos humanos. En su origen se discutió doctrinariamente la compatibilidad de su existencia con los preceptos de la constitucionales. La aprobación de la Ley 18.446 en 2008 por una mayoría especial en el parlamento (solo un voto en contra) superó ese debate para habilitar su creación. Obtuvo su acreditación de *status* A en mayo de 2016, demostrando así cumplir a cabalidad con los Principios de París.

18. En el ámbito de competencias definido por dicha Ley, se le asignó la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho Internacional, así como promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales.

19. Sus autoridades son elegidas por la Asamblea General y el actual Consejo Directivo que asumió funciones el 1/9/2017 está integrado por Mariana Blengio, Juan Faroppa, Mariana Mota, María Josefina Plá y Wilder Tayler. Su período de mandato es 2017-2022.

20. Por sus competencias legales conoce e investiga presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio con potestades para proponer a las autoridades competentes las medidas que considere pertinentes para poner fin a las mismas; lleva a cabo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; emite opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado presenta a los órganos de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; colabora con las autoridades competentes, realización de estudios e informes sobre la situaciones nacionales, prácticas institucionales, medidas administrativas, proyectos de ley y propuestas de reformas constitucionales en temas relacionados con los derechos humanos. También desarrolla actividades en educación, capacitación y formación en derechos humanos, así como de información y difusión.

21. Estas múltiples obligaciones requieren un relacionamiento fluido y eficaz con las instituciones estatales. Para ello implementó una estrategia de articulación interinstitucional, a través de la solicitud de designación de puntos focales para la comunicación. Sin embargo, la respuesta de los organismos ha sido disímil, varios no han dado respuesta formal a esta solicitud.

22. De acuerdo con lo exigido por la Ley, la INDDHH realiza anualmente sesiones extraordinarias del Consejo Directivo o “Asambleas Nacionales de Derechos Humanos”. En ellas participan con voz pero sin voto las organizaciones sociales habilitadas e inscriptas en el registro respectivo, los organismos gubernamentales y otras entidades sujetas a su contralor. Estas instancias de participación amplia y plural son importantes ámbitos de intercambio, que permiten el relevamiento de insumos para la construcción y seguimiento de la agenda institucional.

23. Anualmente también la INDDHH presenta a la Asamblea General sus Informes de actuación según lo requerido por ley. En ellos se sistematiza la información y las actuaciones realizadas en el marco de sus diversas áreas de competencia. Recientemente se publicó el Informe Anual 2021[[3]](#footnote-3).

24.- Como se consignó en el anterior Informe al Comité, en 2013 la INDDHH comenzó a cumplir las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), mediante la realización de las primeras visitas de monitoreo. La INDDHH coordina su actuación con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario siguiendo pautas acordadas de relacionamiento e intercambio de información.

25. La tarea preventiva del MNP se centra en el monitoreo sistemático de las condiciones de vida y trato a las personas en los lugares de encierro mediante la realización de visitas no anunciadas en y en base a una definición amplia de privación de libertad, que incluye «cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente».

26. En el año 2017 se realizaron 78 visitas, en 2018: 103, en 2019: 188, en el 2020: 83 y en el 2121: 81. En todos estos años se fueron identificando la persistencia de factores estructurales que incrementan los riesgos de ocurrencia de actos de tortura y otros malos tratos en los sistemas de encierro institucional.

27.- En 2020 y primer semestre de 2021, la labor de monitoreo se vio particularmente afectada, en el marco del incremento de casos activos por covid-19, y el funcionamiento en régimen de teletrabajo. En este escenario, el MNP revisó su metodología de trabajo para cumplir de modo efectivo su mandato en este contexto, recurriendo a la realización del monitoreo por medios no presenciales. Parte de la comunicación con los centros y la recopilación de información se hizo por vía telefónica, virtual y administrativa (solicitudes por oficio). Las visitas presenciales se realizaron en forma menos frecuente, con aplicación del protocolo sanitario, un menor número de integrantes del MNP por visita y por menos tiempo —focalizándose en objetivos específicos—, con uso del equipo de protección personal y previa evaluación de su beneficio frente a los riesgos de diseminación de la infección, con base en el principio ético de no dañar, y en cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia. Posteriormente, frente al descenso del número de casos y la mayor apertura de los centros, se priorizaron las visitas in situ.

28. En el período de gestión correspondiente al año 2021, se realizaron un total de 81 visitas presenciales a lugares de encierro. Del total, 17 visitas corresponden al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en centros de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; 16 a centros de cumplimiento de medidas privativas de libertad para adolescentes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente en el marco del sistema penal juvenil; 20 a unidades policiales dependientes del Ministerio del Interior; 11 a unidades penitenciarias en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación; y 17 visitas a instituciones de salud mental dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado .

29. En mérito a su competencia legal de conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos a petición de parte o de Oficio, entre el 2016 y el 2021 la INDDHH aprobó 608 Resoluciones con el siguiente detalle:



Si bien las Resoluciones que han realizado Recomendaciones refieren a un muy variado abanico de vulneraciones de derechos, se destacan aquellas que refieren a violencia en la actuación de funcionarios policiales y las que denuncian diversas situaciones de discriminación.

30. En este período, una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictada en el año 2017 entendió que el artículo 7 de la Ley de creación de la INDDHH era inconstitucional, cuestionando la impugnabilidad de sus resoluciones que correspondan al ámbito de competencias establecidas por el artículo 4. Si bien, esta Sentencia se aplica solamente para el caso concreto que la motivó, la misma puede afectar el accionar de las INDDHH al poner en riesgo la efectividad de sus Recomendaciones. Este fallo judicial llevó a que la INDDHH solicitara una Audiencia Pública a la CIDH sobre el tema: “*Autonomía e independencia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”,* que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre de 2017[[4]](#footnote-4).

31. Bajo el impulso de la propia INDDHH, con fecha 21/9/2019 fue promulgada la Ley 19.763 para fortalecer su autonomía funcional. Entre otras modificaciones, se precisó el texto del cuestionado artículo 7 de la ley 18.446, determinando que la vía recursiva se agota ante el Consejo Directivo del organismo, haciendo énfasis en el carácter autónomo de la Institución y que no está sujeta a tutela administrativa respecto de las resoluciones que adopte.

32.- Por Ley N° 19.822 del 18/9/2019 se cometió a la INDDHH la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985. Esta tarea comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos. Esta tarea fue delegada en dos de los directores de la INDDHH.

33.- Si bien la INDDHH ha recibido desde el inicio de sus actividades opiniones críticas a sus resoluciones por parte de las autoridades cuestionadas, desde el cambio de Gobierno en 2020, estas se acentuaron, atribuyéndole intencionalidades políticas partidarias y anunciando públicamente la necesidad de modificar sus competencias legales y el procedimiento de elección de sus autoridades.

34.-En especial han sido reiteradas las críticas públicas de distintas autoridades del Ministerio del Interior hacia Resoluciones de la INDDHH cuestionadoras del accionar policial y la de varios legisladores de los partidos pertenecientes a la coalición de gobierno que han puesto en duda la imparcialidad política de sus directores. El Ministerio del Interior en particular, anunció que desconocería las Resoluciones y Recomendaciones de la INDDHH. A su vez, legisladores del Partido Cabildo Abierto, también de la coalición de gobierno, han propuesto la disolución de la INDDHH. Estos ataques a la INDDHH fueron también realizados en columnas editoriales de varios medios de comunicación.

35.- Cabe también señalar como episodio conflictivo para la INDDHH, lo sucedido en marzo de 2022 cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores demoró en coordinar una visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas; esta circunstancia fue solucionada luego de que la INDDHH anunciara públicamente estas dificultades y finalmente la visita del Grupo de Trabajo fue fijada para julio de 2022.

36. Por su parte el Ministerio del Interior y diversos legisladores del Gobierno acusaron a la INDDHH de querer incidir en la decisión ciudadana puesta a referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración. Este episodio se produjo cuando a partir de una ampliación de la denuncia que presentó la Asociación de Defensores de Oficio que abarca situaciones de detención de los años 2020 y 2021, el MNP realizó y difundió un informe donde se identificaron casi un centenar de casos de abuso policial, amenazas, allanamiento ilegal, lesiones, provocación policial y falta de atención médica. En el mismo, la INDDHH-MNP, solicitó a las autoridades la “urgente investigación” de lo que se entiende como un fenómeno de carácter estructural que tiende a crecer y que las normas sobre el tema contenidas en la LUC generaban un debilitamiento de garantías a nivel general que hace más propicio el abuso policial.

37.- En el mismo sentido opinó un ex Presidente de la República acusando a la INDDHH de posicionarse implícitamente a favor de una de las posiciones sometidas a referéndum el pasado 27 de marzo en Uruguay y de “ayudar a los delincuentes” . También criticó la posición de la INDDHH en la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria por apoyar la solicitud presentada por el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), para que se declare sitio de memoria el territorio actualmente denominado Paso de Salsipuedes, lugar donde ocurrió en el año 1831 una masacre contra la Nación Charrúa[[5]](#footnote-5).

### No discriminación y derechos de las minorías (arts. 2, 3, 16, 25, 26 y 27)

### Respuesta al Párrafo 5 de la Lista de Cuestiones. -

38. Con respecto a las acciones desarrolladas para combatir la discriminación racial y la persistente discriminación estructural contra las personas afrodescendientes, la INDDHH realiza un seguimiento permanente de la implementación de la Ley 19.122 que establece una serie de disposiciones para favorecer la participación de personas afrodescendientes en las áreas educativa y laboral.[[6]](#footnote-6)

39. En su último informe publicado en marzo de 2022[[7]](#footnote-7), se analizan específicamente las acciones afirmativas en el ámbito laboral. Entre 2014 y 2020, la Oficina Nacional del Servicio Civil relevó el ingreso de un total de 2353 personas afrodescendientes en veintidós organismos del Estado y en cuatro Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatal. No obstante, el cumplimiento todavía está lejos de llegar al porcentaje del 8% previsto en la ley, ubicándose en un promedio de 0,69% a diciembre de 2020, mostrando una tendencia decreciente desde 2018. En ese informe se realizan una serie de recomendaciones, algunas de ellas vinculadas a las consultas que realiza el Comité.

40. En el marco del seguimiento mencionado y de una denuncia recibida, la INDDHH analizó la *“Guía para la transversalización de la temática afrodescendiente de la cuota laboral en el Estado Ley 19.122, Art 4”* elaborado por la Oficina de Nacional de Servicio Civil y con el asesoramiento del Ministerio de Desarrollo Social. Esta guía expresa que: ´´Se sugiere priorizar para la aplicación de la cuota aquellos puestos cuyos perfiles resulten más accesibles y donde cabe esperar una gran afluencia de postulaciones´´. Esta orientación se sostiene en el concepto de “perfiles enmarcados en una posible división del trabajo que, de forma simbólica y fáctica, se basa en la raza”, concepción contraria al principio de igualdad y no discriminación.

41. La INDDHH considera que el Estado Uruguayo debe abandonar el concepto (y su terminología correspondiente) de “perfil” en los casos que impliquen definiciones que apunten a definir un rol y un valor social predeterminado a cualquier grupo. Lo anterior exige, específicamente, una adecuación de la terminología de la Guía para evitar que se utilice para desfavorecer a quienes la ley ampara, o para para dificultar la total implementación de esta norma.

42. Acerca del progreso realizado para la adopción del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia 2019-2022, la INDDHH participa del Consejo Nacional de Equidad Racial creado por el Decreto 81/2019 y es de destacar que está en funcionamiento con una frecuencia de reuniones bimensuales. El Consejo se organiza en cuatro comisiones acordes a los objetivos del Plan: Racismo y discriminación, Trabajo, empleo y seguridad social, Salud y Educación. Estas comisiones han elaborado sus planes operativos anuales, ante lo que surge la preocupación por las posibilidades reales de cada organismo para implementar las acciones definidas debido a debilidades institucionales que se observan en los Mecanismos de Equidad Racial a la interna de cada organismo.

43. Por otro lado, la Ley 19.924 de Presupuesto Nacional 2020-2024, convierte a la Dirección de Promoción Socio-cultural del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) –donde se alojaba el Departamento de Afrodescendencia dentro de la División de Derechos Humanos y también al Grupo de Trabajo sobre Políticas de Equidad Racial- en un área dentro de la nueva Dirección Nacional de Desarrollo Social creada por esta Ley. Siendo el MIDES el organismo rector del Plan, preocupa a la INDDHH esta rebaja en la jerarquía dentro del Ministerio pasando de ser un departamento dentro de una dirección, a ser un área. La sociedad civil ha planteado que una de las consecuencias de estos cambios institucionales fue la eliminación del área de trabajo “Inmujeres- Afro”, que abordaba de forma específica la situación de las mujeres afrodescendientes.

44. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el período previsto para este primer plan está llegando a su fin, por lo que cabría esperar que el Estado uruguayo lidere la realización de una evaluación y comience el proceso de elaboración de un segundo plan. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de procesos –tanto la evaluación como la planificación del segundo plan- que deben ser participativos y descentralizados, en los que deben estar dadas las garantías para que la sociedad civil afrodescendiente tenga posibilidad de incidir en todas las etapas del Plan.

### Respuesta al Párrafo 6 de la Lista de Cuestiones.

45. Con respecto al acceso a la justicia y a los órganos administrativos la INDDHH puede dar cuenta de diversas situaciones que han sido constatadas en virtud de las competencias que le otorga el Capítulo III de la ley 18446.

46. Entre los años 2016 y 2021 la INDDHH emitió 82 resoluciones como resultado de denuncias que involucraron casos de discriminación a personas de origen afrodescendiente, personas con discapacidad y personas migrantes. No se registran resoluciones que involucren personas de origen indígena. Si bien no todos estos casos culminaron en la constatación de vulneraciones y recomendaciones al Estado, dan cuenta del acceso a órganos administrativos por parte de estos grupos.

47. De estas resoluciones, 54 refirieron a eventuales situaciones de discriminación hacia personas con discapacidad, 15 hacia personas migrantes y 10 a personas afrodescendientes.

48. En cuanto a las personas con discapacidad[[8]](#footnote-8), algunas de las recomendaciones realizadas por la INDDHH a los organismos involucrados dan cuenta de la necesidad de adecuaciones normativas y de prácticas administrativas:

a) La necesidad de fortalecer y consolidar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en particular la INDDHH le recomendó al MIDES que el derecho a recibir el subsidio para la contratación de asistentes personales, y el monto del mismo, no estén condicionados a la capacidad de pago de los hogares de quienes integran el registro de usuarios.

b) En la resolución 509/2017 se refería a un episodio en el que una jueza no permitió el ingreso a una audiencia de una persona acompañada de un perro lazarillo en etapa de socialización. Esto da cuenta de algunos de los obstáculos en el acceso a la justicia para personas en situación de discapacidad visual, al mismo tiempo que indica debilidades en la formación del funcionariado público. Las personas en situación de discapacidad, y que intervienen en un proceso judicial, deben contar con garantías y oportunidades para ejercer sus derechos en igualdad.

c) También, varios casos investigados por la INDDHH indican que los centros educativos no están preparados para recibir a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, generándose vulneraciones del derecho a la educación, incluso llegando en algunas instituciones privadas a negar la posibilidad de inscripción.

d) En relación a los requisitos de ingreso a la función pública y las personas con discapacidad la INDDHH le recordó al Estado en varias ocasiones que no es admisible la discriminación en las condiciones de selección a los puestos de trabajo, así como al derecho del funcionariado a una evaluación basada en sus capacidades y no en la discapacidad. También se constataron situaciones en las que, si bien se cumple con los ajustes razonables al tipo de discapacidad durante todo el proceso, el perfil previo del llamado ya establecía una situación de desigualdad con las personas que no tenían “independencia en la comunicación” y eso las perjudica en el momento de la evaluación final.

49. En cuanto a las personas afrodescendientes, las intervenciones de la INDDHH producto de denuncias recibidas evidencian las dificultades para el cumplimiento de la ley 19122, en este punto, se remite a las consideraciones realizadas a propósito de la cuestión 6. En cuanto a las personas migrantes, las intervenciones de la INDDHH producto de denuncias recibidas evidencian dificultades para el acceso a una vivienda digna, y la especial vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores. A este respecto, se remite a las consideraciones realizadas a propósito de la cuestión 18.

### Orientación sexual e identidad de género (arts. 6, 7, 17 y 26)

### Respuesta al Párrafo 7 de la Lista de Cuestiones.

50. La ley Integral para las Personas Trans Nº 19.684 de 2018, y el decreto reglamentario 104/2019 introdujeron un gran avance en la protección de derechos de las personas trans. No obstante, la INDDHH ha tramitado diversas denuncias que hacen a las dificultades en su implementación.

51. Respecto a las acciones afirmativas del derecho a la educación a las personas trans, la INDDHH recomendó al Ministerio de Educación y Cultura y a la Universidad de la República a incorporarla en su sistema de becas y en el cumplimiento del art. 16 de la ley 19.684, a los fines de evitar la deserción y garantizar la continuidad educativa de las mujeres y hombres trans.[[9]](#footnote-9)

52. Respecto al derecho a la integridad física y discriminación por identidad de género por parte de funcionarios policiales, la INDDHH recomendó al Ministerio del Interior que profundice la formación de sus recursos humanos y corrija las eventuales disfuncionalidades de modelos operativos policiales en aplicación, conforme a los estándares internacionales.[[10]](#footnote-10)

53. La INDDHH ha recomendado al Instituto Nacional de Adolescentes del Uruguay la realización de propuestas educativas que aborden la temática de la diversidad sexual, para prevenir la discriminación por identidad de género en el ámbito laboral.[[11]](#footnote-11)

54. El decreto 104/2019, en su artículo 2 excluye a las personas declaradas judicialmente “incapaces” del derecho a la adecuación de su nombre o sexo a su identidad de género en los documentos. La ley autoriza a toda persona a la adecuación de sus documentos identificatorios, cuando no sea el caso de una persona declarada incapaz, ya que se le niega la legitimación para actuar por sí o por intermedio de su curador, prohibiéndole su derecho a tener la identidad de género que le corresponde, creando una distinción injustificada respecto de las demás personas.[[12]](#footnote-12)

55. En la aplicación de las competencias que marca la ley 19.307, art. 86, la INDDHH recomendó a los medios de comunicación, Canal 11 y Radio Visión FM de Fray Bentos otorgar a la organización social “Diversidad Sexual Fray Bentos” la oportunidad de emitir en esos medios, en un espacio similar en tiempo y horario, sus planteos con respecto a las opiniones vertidas en el programa “Ni más ni menos polémico” emitido en octubre del 2017. En dichos espacios se realizaron críticas negativas a las políticas de género y a las acciones de promoción de derechos de la diversidad sexual. La INDDHH reiteró la necesidad de que se contemplen y resguarden los derechos de todas las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones, y de promover que las frecuencias sean utilizadas como instrumento promotor del debate democrático, la participación y la no discriminación.[[13]](#footnote-13)

### Igualdad entre el hombre y la mujer (arts. 2, 3, 25 y 26)

### Respuesta al Párrafo 8 de la Lista de Cuestiones. -

56. El Consejo Nacional de Género (CNG) es el espacio institucional de definición de las prioridades de políticas públicas que promuevan la igualdad de género. La INDDHH participa en este espacio como observadora y considera que se trata de un ámbito clave para la discusión y adopción de medidas relativas al avance de la igualdad de género.

El CNG mantiene una o dos sesiones anuales. En 2020 sesionó el 26 de junio y en 2021 sesionó el 29 de octubre. En lo que va del 2022 no ha habido convocatoria. En la sesión del 2020, se presentó un documento que contiene las líneas de trabajo para este periodo de gobierno. Este documento define el trabajo en subcomisiones, sin embargo, no hay información disponible sobre el trabajo de esas subcomisiones hasta el momento. Las instancias con las altas jerarquías se han limitado a que cada organismo haga referencia a los aspectos en los que ha trabajado. En este sentido, en este período de gobierno el trabajo interinstitucional parece haberse debilitado, remitiéndose a diálogos bilaterales entre organismos y no a la generación de articulaciones integrales.

57. Un aspecto a destacar refiere a la participación de las organizaciones sociales en el CNG, que fue ampliada a 5 representantes en la última reforma legislativa. Sin embargo, en las últimas instancias del CNG, la representación de las organizaciones sociales no completó el cupo y en la última no hicieron uso de la palabra. La INDDHH entiende que la participación de las organizaciones sociales debe ser estimulada para que las autoridades nacionales puedan conocer la opinión de las organizaciones sociales.

58. Por otro lado, la INDDHH quiere señalar que la Ley de Igualdad sancionada en 2019 establece la creación de unidades especializadas de género en todos los organismos públicos. Estas unidades implican aprobaciones presupuestales y una necesaria definición de sus competencias y funciones más allá de lo establecido en la ley. La INDDHH celebra la creación de unidades especializadas, pero aboga por una profundización y difusión de sus actividades.

### Violencia contra la mujer (arts. 3, 6, 7, 14, 17 y 26)

###  Respuesta al Párrafo 9 de la Lista de Cuestiones. -

59. El Plan de Acción 2016 – 2019 tuvo como uno de sus logros la elaboración del “Proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género” que diera lugar a la aprobación en 2017 a la Ley 19.580 “Violencia basada en género hacia las mujeres” que tiene por objeto garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia de género, representó un avance sustantivo. Esta ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

60. Luego de finalizado el Plan, el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género se abocó a la elaboración del siguiente “Plan por una vida libre de Violencia de Género hacia las Mujeres”. La INDDHH participó en calidad de observadora de las diferentes instancias del proceso de elaboración del Plan en el marco del trabajo del Consejo. El Plan se ha visto demorado y a la fecha, mayo de 2022, todavía no ha sido aprobado.

61. La falta de un Plan de acción desde 2019, en particular después de dos años de emergencia sanitaria, representa un claro enlentecimiento en la implementación de medidas para garantizar una vida libre de violencia.

62. Por otra parte, la INDDHH señala la urgente necesidad de fortalecer el sistema interinstitucional de respuesta y a incrementar los servicios existentes en todos los organismos del Estado y en todo el territorio nacional. El país ha privilegiado la atención de la violencia doméstica y sexual, pero no se ha logrado incrementar de manera significativa las políticas públicas existentes para atender todas las formas de violencia de género consideradas en la ley vigente.

63. Por último, la INDDHH señala que la Ley 19.580, que preveía la creación de juzgados letrados especializados en violencia basada en género, entró en vigencia hace 4 años y a la fecha sólo se ha creado uno en el departamento de Maldonado (San Carlos).

### Derecho a la vida, prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 3, 7, 9, 10, 14 y 17)

### Respuesta al Párrafo 11 de la Lista de Cuestiones. -

64. Uruguay tipificó el delito de tortura en el artículo 22 de la Ley Nº 18.026, promulgada el 25 de septiembre de 2006, de cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta tipificación no es acorde al artículo 1 de la CCT, lo que fue objeto de recomendación por parte del CAT en el año 2014 y en el examen del cuarto informe periódico del Uruguay, en sus sesiones 1899ª y 1902ª2 , celebradas los días 5 y 6 de mayo de 2022, lo observó nuevamente[[14]](#footnote-14).

65. Al respecto, la INDDHH ha expresado su preocupación sobre el riesgo de impunidad de los actos de tortura que supone una definición restrictiva y que el delito de tortura no esté previsto como delito autónomo en el Código Penal. Ilustrando este hecho, la INDDHH informó al CAT que “*La interpretación judicial restrictiva se observó en el proceso y decisión final sobre los hechos acaecidos el día 24/7/2015 en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) donde resultaron agredidos jóvenes por agentes del Estado que configuraron, en opinión de la INDDHH, actos de tortura de acuerdo al artículo 1 de la Convención. Estos hechos derivaron en el procesamiento con prisión de varios funcionarios de INISA, bajo la imputación ‘prima facie’ de autores y cómplices responsables de un delito de tortura previsto por el art. 22 de la Ley Nº 18.026. Posteriormente, el Tribunal de apelaciones (15/12/2016) revocó estos procesamientos y cambió la tipificación del delito de tortura al de abuso de funciones. Finalmente, en 30/11/2017 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó esta última decisión (Sentencia Nº 2274/2017)”[[15]](#footnote-15).*

66. La falta de un delito autónomo que tipifique y castigue el delito de tortura en el Código Penal, conforme los estándares internacionales y la normativa a la que Uruguay adhirió, conspira contra la aplicación y castigo de dicha conducta.

### Respuesta al Párrafo 12 de la Lista de Cuestiones.

67. En relación a las situaciones de tratos crueles inhumanos y degradantes en los primeros momentos de detención y custodia policial, por denuncias recibidas y visitas del MNP se destacan:

* Utilización de esposas y grilletes, amenaza con armas de fuego (apuntando a las personas detenidas) al momento del arresto y el uso de lenguaje ofensivo, amenazante o inapropiado.
* Prácticas de solicitud de documentación y/o detención discriminatorias.
* En la mayoría de los relatos de las y los adolescentes detenidos aparecen referencias a haber estado expuestas/os a algún tipo de violencia (física, psicológica, simbólica).

 A su vez, en el cumplimiento de medidas cautelares se destacan:

* Condiciones edilicias inadecuadas (espacios comunes cerrados y con escasa luz natural, significativa presencia de humedad en las paredes y pisos, sectores inundables, entre otras).
* Situaciones de violencia entre pares (CIAM) y esporádicas de uso desproporcionado de la fuerza. Requisas naturalizadas cuando son prácticas sistemáticas y violentas y situaciones de violencia psicológica, (amenazas, sarcasmos, violencia verbal y formas solapadas de hostigamiento como traslados a sectores de sanción).

68. La INDDHH ha observado también que las disposiciones contenidas en el articulado de la Ley 19.889 Ley de Urgente Consideración (LUC) debilitan las garantías de protección de los derechos humanos y la prevención de la tortura.[[16]](#footnote-16)

69. Los contenidos de la LUC referidos a la legislación policial exhiben una tendencia a la concentración y aumento de facultades y de la discrecionalidad, así como un detrimento de los controles de la actuación de los integrantes de la fuerza pública. En efecto, el artículo 1º extiende la legítima defensa, un instituto propio de los conflictos entre particulares a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo cual pone en riesgo el derecho a la vida y puede propiciar eventuales desbordes en la actuación de la autoridad.- El literal II del artículo 1º de la LUC señala que la “legítima defensa” en la actuación de los funcionarios de los Ministerios de Defensa e Interior que repelen una agresión física se produce “empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva, en cuanto eso sea posible.” La inclusión de la frase “en cuanto eso sea posible” es de una generalidad e imprecisión que prácticamente quita todo el sentido a la anterior referencia a los principios de racionalidad, proporcionalidad y progresividad, que configuran los estándares internacionalmente reconocidos para orientar el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

70. El Art. 4 de la LUC, agrega un literal al Art. 173 del Código Penal. La figura penal de “resistencia al arresto” la cual es cuestionable a la luz de la normativa penal existente, teniendo en cuenta que ya existía el delito de desacato. La modificación aumenta las posibilidades de uso de malas prácticas –tales como intervenciones inadecuadas por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley-, o incluso de abuso de poder.

71. El artículo 43 modifica el inciso 2 del Artículo 6 de la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) que regula el procedimiento policial en cuanto al plazo para la comunicación inmediata de la actuación policial al Fiscal. El régimen de las dos horas previstas por la ley referida se sustituye por uno de cuatro lo cual constituye un debilitamiento de garantías para quien resulte detenido.

72. En su artículo 44 modifica el artículo 14 de la ley 18.315) sobre los procedimientos policiales en lo que refiere a las indicaciones a tener presente cuando la policía tiene que adoptar medidas de seguridad. Se sustituye la prevención de medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función por un texto que elimina las palabras defensivas u ofensivas estrictamente necesarias disminuyendo así, a juicio de la INDDHH, las garantías frente a la posibilidad de abusos de poder.

 73. El artículo 45 modifica también la regulación establecida por el art. 20 de la ley de Procedimiento Policial sobre la oportunidad para el uso de la fuerza por parte de la policía. Preocupa a la INDDHH la concentración y el otorgamiento de nuevos poderes y facultades a los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En virtud de esta concentración de poderes pueden verse vulnerados o amenazados gravemente los derechos humanos o producirse un debilitamiento de las garantías frente al accionar policial. La previsión referida al uso legítimo de la fuerza en el caso de porte de arma impropia e incluso al ocultamiento de la identidad puede afectar el cumplimiento de la obligación del Uruguay de asegurar el derecho de reunión de las personas.

74. Respecto de las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y de seguridad, el MNP en base al monitoreo que surge de las visitas no anunciadas realizadas a secciones policiales ha concluido que existe un debilitamiento de las garantías de las personas durante los primeros momentos de la detención.

75. Esta conclusión coincide con un Informe realizado por la Asociación de Defensores de Oficio que refiere a 102 situaciones denunciadas relevadas por los defensores, de las cuales 62 pueden enmarcarse en la categoría de abuso policial –aunque también puede presentarse en otros casos–, en la que se considera el uso excesivo de la fuerza en los procedimientos tanto en la detención como en momentos posteriores

76. El MNP al efectuar el monitoreo de las condiciones de detención en las Seccionales Policiales, concentró el estudio en los años 2020 y 2021 en las cuatro zonas operacionales en las que se encuentra organizada la Jefatura de Policía de Montevideo. El análisis se concentró en la supervisión del cumplimiento de cuatro garantías en los primeros momentos de detención: notificación a familiares, examen médico, derecho a la asistencia jurídica e información sobre los derechos.

77. En febrero de 2022 el MNP publicó el informe “*Garantías en los primeros momentos de la detención. Lineamientos para un abordaje preventivo (2022 - 2023*)[[17]](#footnote-17), en el que se realizan una serie de recomendaciones a distintas instituciones estatales: Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y Asamblea General del Poder Legislativo. El informe señala un debilitamiento de las garantías de las personas durante los primeros momentos de la detención. A su vez, el MNP entiende que a partir de la aprobación de la LUC se ha vuelto aún más difícil verificar si ha existido un abuso debido a que: i) se extendió hasta cuatro horas el período en que la persona detenida puede permanecer sin notificación al fiscal o juez; ii) se estableció́ la posibilidad de tomar declaraciones voluntarias en sede administrativa a efectos de «realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delito», iii) Se dispuso una presunción relativa de legitimidad en la actuación policial durante el cumplimiento de funciones que representa una riesgosa inversión de la carga de la prueba en materia penal con afectación de los derechos fundamentales

78. En lo que refiere a adolescentes privados de libertad el MNP publicó en 2021 el informe *“Adolescentes en privación de libertad. Situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos*”[[18]](#footnote-18) que realiza un acercamiento a situaciones de violencia durante la detención y en el marco del cumplimiento de las medidas cautelares. El informe indagó el cumplimiento de las cuatro garantías en los primeros momentos de la detención y de las condiciones en que se producen situaciones de violencia institucional. Lo que más preocupa es que no se brinde una información detallada sobre las razones de la detención y muy poca sobre los derechos individuales, así como el escaso contacto con la defensa que surge de los testimonios.

79. Preocupan a la INDDHH las normas contenidas en la LUC sobre adolescentes privados de libertad, que establecen un régimen particularmente duro y agobiante, en una etapa del desarrollo en que deben evitarse los efectos negativos del contacto extensivo con el sistema punitivo. En el sistema penal juvenil las reformas contravinieron los principios de temporalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.

80. El régimen de semi libertad mencionado en el artículo 75 es una de las variantes de la privación de libertad, a lo único que habilita es a estar fuera del establecimiento durante un periodo de 8 hs. Esta aplicación restrictiva, limita las posibilidades de inserción laboral educativa y social, tan importantes en esta etapa vital. Bajo la nueva propuesta, un adolescente puede ingresar al sistema con 13 y egresar con 23 años, habiendo pasado casi la mitad de su tiempo de vida en privación de libertad, prácticamente sin conocer un liceo o tener amigos, fuera de la privación de libertad.

81. A juicio de la INDDHH este enfoque no lograría la inserción social, laboral o educativa sino solamente la exclusión, la pena, el castigo, la aflicción sobre el otro, que por el contrario termina definido como una no persona y por lo tanto diferente y por ello pasible de ser sometido a este tipo de penas. Este tipo de disposición no se adecua a la Convención sobre los Derechos del Niño referidas a la excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad y las otras normativas específicas referentes a las personas menores de edad en infracción. También ignora las particularidades del derecho penal juvenil que atiende a las y los adolescentes como sujetos diversos de derecho en proceso de desarrollo.

82. El incremento de la respuesta punitiva en los términos establecidos por la LUC da cuenta de una regresión en materia de derechos humanos y erosiona los compromisos contraídos por el país a lo largo de décadas a través de distintos tratados internacionales de derechos humanos.

### Eliminación de la trata de personas y de la esclavitud y la servidumbre (arts. 7, 8, 14 y 24)

###  Respuesta al Párrafo 13 de la Lista de Cuestiones.

83. La INDDHH tomó conocimiento en 2019 de la existencia de posibles redes de tráfico de personas en Uruguay, en particular, personas de nacionalidad cubana que estaban siendo ingresadas por la frontera de Uruguay con Brasil. Luego de informar esta situación al Ministerio Público, este comunicó que estaba en su conocimiento y que se encontraba sometida a la Justicia competente. Hasta la fecha de cierre de este informe, la Fiscalía no ha informado a la INDDHH sobre los resultados de esta investigación, en cuanto a la identificación y condena de los responsables, así como sobre la situación actual de las víctimas y las medidas que se tomaron para evitar que se repita.

84. Por otra parte, a través de una denuncia la INDDHH tomó conocimiento sobre posibles situaciones de trabajo esclavo, trata y muerte de personas en el puerto de Montevideo asociada a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur. En la denuncia se señaló que, en ambas situaciones, existirían fallas en la identificación de embarcaciones que ingresan al puerto capitalino. Asimismo, se advertía sobre la cantidad de “tripulantes muertos por mes proveniente de embarcaciones y la detección de numerosas embarcaciones que manipulan su identidad transmitida por el AIS (Sistema de Identificación Automática), durante su estadía en el Puerto de Montevideo y sus operaciones pesqueras, despierta la sospecha de encubrimiento de actividades ilícitas”. Agregaron que “el 44% de las embarcaciones chinas manipula la posición GPS que transmite el AIS.” En base a la información recibida por la INDDHH de parte de los organismos competentes, de un total de 48 buques pesqueros de tercera bandera 22 presentaron irregularidades y/o presuntas infracciones en el puerto de Montevideo, lo que es cercano al porcentaje denunciado.

85. La INDDHH entiende –y así lo comunicó a las autoridades- que esta situación debe ser investigada por parte del conjunto de todos los organismos del Estado involucrados (Administración Nacional de Puertos, Prefectura Naval, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca), en el plazo más breve posible. Adicionalmente, que se disponga de inmediato el control especial sobre los buques pesqueros que han cometido infracciones o han estado en actitud sospechosa en relación a los datos proporcionados por Prefectura del Puerto de Montevideo sobre los AIS y en base a la Ley 19017, así como se realicen inspecciones sobre las embarcaciones pesqueras, profundizando sobre las condiciones de trabajo de los tripulantes de los barcos pesqueros, donde hayan sido constatadas irregularidades.

### Personas privadas de libertad y condiciones de detención (arts. 2, 6, 7, 9, 10 y 14)

### Respuesta al Párrafo 14 y 15 de la Lista de Cuestiones. -

86. La aprobación de la LUC también introdujo diversas modificaciones en el ámbito penal y procesal penal. El endurecimiento de las penas en delitos que refieren al tráfico de sustancias psicoactivas. Han repercutido en la cantidad de mujeres imputadas y condenadas, tal como lo han señalado los diversos actores del sistema. Esto ha provocado un incremento de mujeres privadas de libertad cumpliendo en muchos casos una medida cautelar de arresto domiciliario a la espera de sentencia.

87. Así, se agravó de manera significativa la situación de las mujeres privadas de libertad, al establecer un aumento del mínimo punitivo de los tipos penales no excarcelables, a lo que debe sumarse un drástico endurecimiento en la forma de cumplimiento de las penas: imposibilidad de acordar penas en régimen de libertad a prueba y de salidas transitorias y cambios en la redención de la pena por trabajo y estudio.

88. Este proceso de endurecimiento de la respuesta penal para mujeres privadas de libertad tiene lugar en el marco de un aumento sostenido del número de personas privadas de libertad, que colocan a Uruguay como el país con mayor tasa de prisionización de América del Sur, tal como surge de la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación.

89. Por otro lado, la LUC incorporó para adolescentes la modalidad de proceso abreviado. Esta modalidad se ha ido impulsando en nuestro país y en la región, poniendo en riesgo un proceso infraccional para adolescentes que reconozca las características propias de su etapa vital, siendo central del principio de especialidad, estipulado en el art. 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). La modalidad del proceso abreviado articulada con la derogación de distintos institutos (suspensión condicional del proceso) operada también por esta misma norma y la limitación del acceso a la libertad asistida tensionan los principios de excepcionalidad y brevedad. En efecto, con la irrupción del abreviado y de la modalidad de proceso simplificado se puede observar un incremento en la judicialización de ciertos delitos y la drástica disminución de los juicios orales, lo que en la práctica significa un debilitamiento de las garantías.

 90. Estos no constituyen mecanismos de derivación temprana, tal como se mandata desde el sistema de protección de derechos, sino mecanismos de incorporación al sistema penal con menores garantías. Por otra parte, si bien está previsto normativamente es posible afirmar que no existe el acompañamiento y apoyo al adolescente en el momento de la renuncia a la garantía del juicio oral y la tramitación del proceso abreviado.

### Lucha contra la impunidad y medidas de reparación en relación con las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura (arts. 2, 6, 7, 9 y 14)

###  Respuesta al Párrafo 17 de la Lista de Cuestiones. -

91. Tal como lo señaló el Informe Final del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia presentado el 14 de octubre de 2019[[19]](#footnote-19), el Estado debe seguir en la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos, dado que hasta el momento son pocos los hallazgos logrados.

92. Por Ley 19.822 del 18/9/2019 se le cometió a la INDDHH la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985. La tarea comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos. En cumplimiento de esta mandato legal ya ha presentado cuatro informes, siendo el último de fecha 3/2/2022[[20]](#footnote-20)[[21]](#footnote-21).

93. Los hechos más relevantes señalados son:

* la negativa del Estado uruguayo a facilitar la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas a Uruguay, que fuera revertida luego de la publicación del informe.
* la continuidad de los trabajos de excavación que incluyeron la apertura de nuevas áreas de trabajo, el establecimiento de nuevas cautelas judiciales y la culminación de nuevas excavaciones en el Servicio de Material y Armamento.
* la culminación de los trabajos de excavación en áreas de la Brigada de Comunicaciones No. 1 y el levantamiento de las respectivas cautelas judiciales.
* la renovación de la cooperación de la Intendencia de Canelones para realizar trabajos en ciertas áreas del Batallón No. 14.
* la continuación del trabajo de investigación incluyendo la sistematización de documentos, entrevistas a testigos e inspecciones oculares. La invitación a la INDDHH a una audiencia con la Comisión del Defensa de la Cámara de Representantes.
* el llamado público de la INDDHH a establecer una política de Estado sobre los archivos que podrían llevar al esclarecimiento de las desapariciones forzadas.

94. Entre otros temas, se detallan los avances en excavaciones, las investigaciones (en Uruguay y Argentina), la situación de los archivos que estaban en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y su digitalización, y la cooperación e intercambios con autoridades nacionales y departamentales.

95. En cuanto a las medidas adoptadas a fin de que las víctimas reciban una reparación integral, no ha habido desde el Estado avances con respecto a las recomendaciones realizadas por la INDDHH[[22]](#footnote-22) acerca de la necesidad de adoptar de medidas administrativas que permitan incluir a las víctimas a las que se les ha negado la reparación – en cualquiera de sus modalidades- y se sugería la necesidad de modificar las leyes dictadas a fin de abarcar en forma integral las diferentes situaciones evitando exclusiones indebidas.

96. Con motivo de la actuación de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad así como del relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, la INDDHH emitió un informe reiterando la recomendación al Estado de resolver las barreras que impiden una reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado[[23]](#footnote-23)

97. En 2019 la INDDHH le recomendó al Estado que reconozca y repare a las personas que siendo niñas /os o adolescentes durante el periodo de facto sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos por parte del accionar ilegitimo de agentes del Estado[[24]](#footnote-24).

### Migrantes, refugiados, apátridas y solicitantes de asilo (arts. 2, 3, 14, 16 y 23 a 26).

### Respuesta al Párrafo 18 de la Lista de Cuestiones. -

98. Sobre las personas migrantes y solicitantes de refugio, la principal problemática constatada por la INDDHH en las denuncias recibidas se relaciona con el derecho a una vivienda digna y el acceso a servicios básicos, en este grupo se destaca la vulnerabilidad extrema de mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a los desalojos forzosos.

99. En la mayoría de las ocasiones se le presentan a esta población migrante dificultades difícilmente superables como la obtención de una garantía para arrendar, lo que les hace usuarios casi obligados a recurrir a soluciones habitacionales precarias, quedando a merced de la voluntad del dueño o del “encargado” del inmueble que funciona irregularmente como una pensión.

100. Sobre este aspecto, la INDDHH ha señalado que no puede quedar como única alternativa para las personas migrantes los refugios para personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social, destinados a atender otras vulnerabilidades. Sin embargo, por el momento esta es la única respuesta estatal posible a las urgentes necesidades de vivienda de esta población.

101. En 2020 se aprobó la ley 19889 estableciendo un régimen de arrendamiento sin garantía (artículos 421 y siguientes). Durante su tratamiento como proyecto de ley, la INDDHH llamó la atención sobre las modificaciones que se hacen por considerarlas un riesgo para el derecho a la vivienda de los sectores vulnerables y contradictorias con la Constitución de la República y los estándares internacionales con respecto a los desalojos forzosos en casos de personas en situación de vulnerabilidad.

102. La INDDHH ha recomendado al Estado la elaboración de un protocolo entre los organismos que disponga la coordinación interinstitucional con el fin de asegurar que no se agudice la vulnerabilidad en sus derechos en situaciones de desalojos forzosos, estableciendo, entre otras medidas, un procedimiento alternativo con medidas de urgencia y provisorio, destinados a las familias, especialmente aquellas integradas por niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y mujeres jefas de hogar. Adicionalmente, la INDDHH ha recomendado adoptar una normativa adecuada, eficiente y sometida a los debidos procedimientos de control para las pensiones regulares o irregulares donde reside mayoritariamente población migrante vulnerable.

103. En cuanto a las personas que solicitan refugio, la Comisión de Refugiados (CORE) debe diseñar y comenzar a aplicar de inmediato una política pública de atención humanitaria a las necesidades urgentes de estas personas, que contemplara la atención en salud, alimentación y vivienda al menos en los primeros días de su ingreso al país. La coordinación con las organizaciones de la sociedad civil es necesaria, pero, como ya se ha señalado por la INDDHH, no puede cargarse sobre las mismas el apoyo humanitario a personas que solicitan refugio en Uruguay. Igualmente, debería destinarse presupuesto para apoyar a las personas una vez que son reconocidas como refugiadas en nuestro país.

104. Por último, los procedimientos especiales aplicados para el ingreso al país durante la pandemia en frontera seca en Uruguay, vulneraron los derechos de las personas solicitantes de refugio, dado que se estableció que en los puestos de frontera se aplique un formulario de autorización de ingreso excepcional al país, que no cumple con los requisitos formalmente establecidos en la legislación vigente (no rechazo en frontera y a la no devolución, conforme al artículo 12, 13 y 14 de la Ley 18.076)

### Libertad de expresión, asociación y violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas (arts. 7, 19, 21 y 22)

### Respuesta al Párrafo 20 de la Lista de Cuestiones. -

105. Si bien la normativa nacional en materia de libertad de expresión cumple a satisfacción los estándares internacionales en la materia, desde organizaciones de la sociedad civil y del gremio de la prensa se ha informado que en los últimos tres años se aprecia un incremento en las amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay

106. Entre estas situaciones se destaca mayormente el incremento de las acciones penales y civiles dirigidos contra periodistas y medios de comunicación, así como también la difusión de discursos estigmatizantes, lo cual genera un clima de hostilidad que muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques. Todas conductas que inhiben la libertad de prensa e información. Preocupa en especial a la INDDHH cuando el origen de estas conductas hacia periodistas y medios proviene de autoridades públicas disconformes por comentarios o informaciones que se publican en los medios.

107. No se han formulado por parte del Estado medidas especiales tendientes a proteger a los periodistas y medios de comunicación y a las personas defensoras de derechos humanos frente a este tipo de agresiones.

108. Con respecto al derecho de libre circulación y protesta pacífica, a juicio de la INDDHH la LUC introdujo una regulación regresiva que restringe el ejercicio de este derecho. La Ley utilizar una definición general, excesivamente amplia e imprecisa que no cumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Esta regulación legal faculta el uso de la fuerza pública para disolver “piquetes” sin considerar el estándar de prohibición del uso de la violencia para ese fin cuando las manifestaciones o protestas son pacíficas otorgándole a la autoridad policial una amplísima y excesiva discrecionalidad para declarar ilegal por su mero arbitrio cualquier forma de “piquete”.

109. Con respecto al derecho de acceso a la información pública sigue existiendo renuencia de muchos organismos en cumplir a cabalidad la Ley 18.381 (“Acceso a la Información Pública”): falta de respuesta a solicitudes concretas, interpretación arbitraria de las excepciones e incumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.

110. En este tema, se produjo un retroceso a nivel normativo con la aprobación en la LUC al crear una nueva categoría de información secreta y establecer declaraciones genéricas de reserva sin cumplir con el deber de fundamentar su interés público ni demostrar su necesidad y proporcionalidad. La LUC otorga potestades muy amplias a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado para producir “inteligencia estratégica” y por tanto manejar información pública y datos personales. En este sentido, al incluir bajo la “dirección” de esta Secretaria las políticas de información que están en las órbitas de los organismos y órganos pertenecientes al Sistema, se puede afectar la debida transparencia tanto activa y pasiva de la gestión de estos, al librarlas del control parlamentario al cual están sujetos los Ministerios. Al ubicar a esta Secretaría de Inteligencia como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, actuando el Presidente de la República en acuerdo con los Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, sus políticas de información quedan con mucho menor contralor de la ciudadanía por quedar en manos de un organismo, que cuenta con un poder de autonomía mucho mayor, que rige su actuación por los principios de la reserva y utiliza el secreto como regla general.

### Respuesta al Párrafo 21 de la Lista de Cuestiones. -

111. En materia de servicios de comunicación audiovisual la Ley 19.307 no ha tenido un proceso sostenido de implementación y el Poder Ejecutivo ha presentado ante el Parlamento un Proyecto de Ley que impulsa su derogación. Este proyecto ha merecido una opinión crítica por parte la INDDHH por significar, a su juicio, un retroceso con respecto a la ley vigente en cuanto a la armonización entre los estándares internacionales en la materia y la normativa nacional.[[25]](#footnote-25)

112. No obstante la INDDHH manifiesta su conformidad con los avances logrados en la aplicación de normas sobre accesibilidad en los programas oficiales televisivos, lográndose en la actualidad una amplia cobertura, en especial en programas informativos y de interés público importante.

### Personas con discapacidad

### Respuesta al Párrafo 26 de la Lista de Cuestiones. -

 113. La INDDHH ha concurrido al parlamento (mayo 2022) a reiterar su interés por que se designe el mecanismo de supervisión de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) previsto en el artículo 33.2 de dicho instrumento. A partir de consultas y reuniones interinstitucionales, realizadas desde 2017 con amplia participación de actores gubernamentales, sociedad civil y sistema de Naciones Unidas, se llegaron a acuerdos respecto a la necesidad de que este mecanismo sea designado por ley, así como la dotación de los recursos acordes para su implementación.

 114. Persisten los problemas legales de adecuación de la normativa nacional para el cumplimiento del artículo 12 de la CPDP. No se han implementado las medidas previstas.

115. Todavía se mantiene incambiado el derecho al voto respecto de la interpretación restrictiva del artículo 80 de la Constitución y sus leyes reglamentarias de personas declaradas incapaces de acuerdo al artículo 431 del Código Civil, que realiza la Corte Electoral, más allá de los avances realizados respecto a la accesibilidad física a los locales de votación.

116. Ante la tramitación de varias denuncias de colectivos de familias respecto de las dificultades de asegurar que sus hijas/os en situación de discapacidad pudieran concurrir a centros educativos, desde la INDDHH se propició la creación del ``Protocolo guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación`` diseñado en conjunto y acuerdo entre la sociedad civil organizada y las instituciones responsables. La presentación de este protocolo fue acompañada con una campaña de sensibilización.

ANEXO 1 – Leyes aprobadas en el período 2016-2021[[26]](#footnote-26)

**.** Ley 19.293 de aprobación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) (19/12/14)[[27]](#footnote-27)

. Ley 19.510 de entrada en vigencia del nuevo CPP (14/07/17)

. Ley 19.529 - Salud Mental (24/8/2017)[[28]](#footnote-28)

. Ley 19.550 - Fiscalía especializada crímenes de lesa humanidad (9/1172017) [[29]](#footnote-29)

. Ley 19.580 - Violencia hacia las mujeres basada en género (22/12/17)[[30]](#footnote-30)

. Ley 19.641- Sitios de memoria histórica del pasado reciente.

. Ley 19.643 - Prevención y combate a la trata de personas (20/07/18)

. Ley 16.654 Voto en el Exterior[[31]](#footnote-31)[[32]](#footnote-32) (17/8/2018)

. Ley 19.682 - Reconocimiento y protección al apátrida (26/10/18)

. Ley 19.684 - Protección Integral para personas trans (26/10/18)

. Ley 19.685 - Promoción del desarrollo con equidad de género (26/10/18)

. Ley 19.691 - Promoción del trabajo para personas con discapacidad (29/10/18)

. Ley 19.747 - Modificativa del Código de la Niñez y la Adolescencia. Capítulo XI. (19/04/2019)

. Ley 19.763 - Institución Nacional de Derechos Humanos. Modificación de la Ley Nº 18.446. (21/06/2019)

. Ley 19.764 - Personas con discapacidad visual. medicamentos. Acceso información. (21/06/2019)

. Ley 19.773 - Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) (17/07/2019)

. Ley 19.785 - Creación del Consejo Asesor Consultivo del Directorio del INAU. (23/08/2019)

. Ley 19.791 - Instituciones trato directo con niñas, niños, adolescentes, discapacitados y personas mayores dependientes. Medidas preventivas. (30/08/2019)

. Ley 19.789 - Aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. (30/08/2019)

. Ley 19.830 - Modificación de la Ley 15.750. Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales. (18/09/2019)

. Ley 19.822 - Asignación de competencia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en la búsqueda de desaparecidos. (18/09/2019)

. Ley 19.831 - Modificaciones al Código del Proceso Penal en materia de libertad Vigilada. (18/09/2019)

. Ley 19.846 – Igualdad de derechos y no discriminación entre mujeres y varones.

. Ley 19.889 - Ley de Urgente Consideración[[33]](#footnote-33). (9/7/2020)

. Ley 19.903 - Campaña abuso sexual infantil (18/9/2020)

. Ley 19.914 - Intercambio de Información Migratoria. Acuerdo MERCOSUR (13/11/2020)

. Ley 19.924 - Sobre el control parlamentario y ciudadano de los bienes patrimoniales[[34]](#footnote-34)

. Leyes 19.932 y 18.941 - Interpretación del Artículo 38 de la Constitución referido al Derecho de Reunión. Limitación transitoria. Reglamentación. (21/12/2020 y 23/03/2021)[[35]](#footnote-35)

. Ley 19.947 - COVID-19. Dia Vacunación. Trabajador. Horario especial. (6/4/2021)[[36]](#footnote-36)

. Ley 19.948 - Tratamiento datos personales. protección personas. Convenio. Protocolo enmienda. (16/04/2021)

. Ley 19.973 - Políticas de empleo para jóvenes, trabajadores mayores 45 años, personas con discapacidad. (6/9/2021)

. Ley 19.978 - Teletrabajo. promoción y regulación. (20/08/2021)

. Ley 19984 - Telemedicina. Consentimiento de menores. (27/08/2021)

. Ley 20.000 - Subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada. (18/11/2021)

. Ley 20.014 - Síndrome Down. Diagnóstico prenatal y postnatal. (16/12/2021)

1. El primero fue presentado por la INDDHH el 5/9/2013 para el 109° período de sesiones del Comité del Comité de Derechos Humanos, ocasión en que se examinó el Quinto Informe Periódico de Uruguay, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección efectiva de los Derechos Civiles y Políticos. [↑](#footnote-ref-1)
2. El software SIMORE es un medio informático público donde se registran las acciones del Estado relacionadas al cumplimiento e implementación de las recomendaciones y observaciones formuladas por el sistema universal de protección de derechos humanos. [↑](#footnote-ref-2)
3. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/inddhh-entrego-parlamento-su-informe-anual-derechos-humanos-2021> [↑](#footnote-ref-3)
4. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zD9uZ21yQmo> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ver informe en <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/Res.%20N%C2%BA36%20Salsipuedes.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Sobre el derecho a la educación y el trabajo de las personas afrodescendientes, se sugiere consultar el Mirador DESCA, una herramienta desarrollada por la INDDHH en conjunto con la Universidad de la República: <http://miradordesca.uy/afrodescendientes/> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/dia-internacional-eliminacion-discriminacion-racial-0> [↑](#footnote-ref-7)
8. Sobre el marco normativo y las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, se sugiere consultar el Mirador DESCA, una herramienta desarrollada por la INDDHH en conjunto con la Universidad de la República: <http://miradordesca.uy/personas-con-discapacidad/> [↑](#footnote-ref-8)
9. INDDHH (2021) Resolución 990/2021. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/noticias/Resoluci%C3%B3n%20990-2021.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. INDDHH (2019) Resolución 777/2019. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/institucional/informacion-gestion/resoluciones/resolucion-n-777019-recomendaciones-mi> [↑](#footnote-ref-10)
11. INDDHH (2018) Resolución 595/2018. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/institucional/informacion-gestion/resoluciones/resolucion-n-595018-recomendaciones-instituto-del> [↑](#footnote-ref-11)
12. INDDHH (2020) Resolución 830/2020, resumen en el Informe anual 2020, pág. 96. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/Informe%20Anual%20a%20la%20Asamblea%20General%202020.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. INDDHH (2017) Resolución 543/2017. Ver también: <https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/4/a-tres-anos-de-la-reglamentacion-de-la-ley-trans-colectivos-lgbti-advierten-incumplimientos-en-salud-trabajo-y-educacion/> [↑](#footnote-ref-13)
14. Ver Observaciones: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/URY/INT\_CAT\_COC\_URY\_48654\_S.pdf [↑](#footnote-ref-14)
15. INDDHH, Informe de la INDDHH dirigido al Comité contra la Tortura de fecha 14 de junio de 2018. pág. 3-4 en respuesta a la cuestión 2. <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-preliminar-inddhh-comite-contra-tortura-para-64a-sesion> [↑](#footnote-ref-15)
16. Durante el tratamiento del proyecto de ley la INDDHH presentó tres informes a la Comisión parlamentaria correspondiente: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/nuevo-informe-inddhh-sobre-ley-urgente-consideracion> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-acceso-examen-medico-primeros-momentos-detencion> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/presentacion-informe-sobre-violencia-institucional-contra-adolescentes> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/noticias/Informe%20final%20Grupo%20de%20Trabajo%20por%20Verdad%20y%20Justicia_0.pdf> [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/cuarto-informe-inddhh-sobre-busqueda-detenidos-desaparecidos> [↑](#footnote-ref-20)
21. Los enlaces a los Tres Informes anteriores se pueden encontrar en el mismo cuarto Informe: [↑](#footnote-ref-21)
22. Informe sobre reparatoria y exclusiones <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/Informe-INDDHH_Reparatoria-y-Exclusiones.pdf> [↑](#footnote-ref-22)
23. Informe de la INDDHH en relación a la actuación de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre reparatoria <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-inddhh-relacion-actuacion-relatores-especiales-naciones-unidas> [↑](#footnote-ref-23)
24. Resolución 751/2019 <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/institucional/informacion-gestion/resoluciones/resolucion-n-751019-recomendaciones-presidencia-gtvj> [↑](#footnote-ref-24)
25. El 7/10/2020, la INDDHH compareció ante la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes que tiene a estudio este Proyecto de Ley a fin de trasmitir su opinión: <https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/versiones-taquigraficas/49/221/0/CAR?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow> [↑](#footnote-ref-25)
26. Sobre varias de estas normas la INDDHH elaboró Informes especiales cuyos links de enlace se encuentran a pie de página. [↑](#footnote-ref-26)
27. Informe de la INDDHH: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-parlamento-sobre-proyecto-sustitutivo-del-aprobado-senado-regula> [↑](#footnote-ref-27)
28. Informe de la INDDHH: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-proyecto-ley-se-reglamenta-derecho-proteccion-salud-mental> [↑](#footnote-ref-28)
29. Informe de la INDDHH <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/comunicados/declaracion-inddhh-sobre-administracion-justicia-derechos-humanos> [↑](#footnote-ref-29)
30. Informe de la INDDHH: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-tematico-derecho-acceso-justicia-mujeres-victimas-violencia> [↑](#footnote-ref-30)
31. Informes de la INDDHH: 2016 y 2018 https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/2do-informe-tematico-voto-uruguayos-exterior y

https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/Recomendaci%C3%B3n-INDDHH-VOTO-EXTERIOR.pdf [↑](#footnote-ref-31)
32. La INDDHH participó en la Comisión Honoraria sobre Voto desde el Exterior y elaboró el Informe suyo link de acceso figura en la mota precedente. En esa Comisión no participaron tres de los partidos políticos, dos de ellos principales en el escenario político del país, los que promovieron con éxito una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia impidiendo así todo avance en el reconocimiento y ejercicio del derecho al voto desde el exterior. De esta manera, el Uruguay es el único país de América latina que no permite el derecho al voto de sus ciudadanos residentes fuera de las fronteras territoriales destacándose que esta diáspora constituye un 17 % de la población total, colectivo que se mantiene activo en el reclamo de este derecho humano fundamental. [↑](#footnote-ref-32)
33. Esta Ley regula, entre otros, distintos temas vinculados a los derechos humanos. La INDDHH en el momento de la discusión parlamentaria presentó al Parlamento el 15 de junio de 2020 el Informe: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/nuevo-informe-inddhh-sobre-ley-urgente-consideracion [↑](#footnote-ref-33)
34. Informe de la INDDHH: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/sobre-control-parlamentario-ciudadano-bienes-patrimoniales [↑](#footnote-ref-34)
35. Informe de INNDDHH:: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/sobre-reglamentacion-legal-del-derecho-reunion-pacifica-razones-salud-publica [↑](#footnote-ref-35)
36. Informe de la INNDDHH: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/primer-informe-inddhh-sobre-exigencia-vacunacion-contra-covid-19 [↑](#footnote-ref-36)